

## A VUELTAS CON LOS LIBROS

[Publicado en "QAZRIS"

Agosto-Octubre 1996]

Una semana –casi- en el enorme angarón del Liber'96 da para reflexionar, y mucho, sobre el libro. Reflexionar sobre ese objeto que aúna en su íntima naturaleza la doble y contradictoria condición, no siempre fácilmente conciliable, de producto mercantil e instrumento cultural.

Naturaleza doble y conflictiva que sus artífices, particularmente los editores, sufrirán en carne propia, a veces de forma harto problemática. Así lo reconocía uno de ellos en las jornadas de debate que se celebraron paralelamente en la *Feria del libro de Barcelona Liber'96*: "En un tanto por ciento variable y a veces difícilmente discernible, el editor debe ser al mismo tiempo empresario y agente cultural."

Imposible no estar de acuerdo con semejante criterio. Pero ¿en qué proporción han de combinarse ambos ingredientes?. Ese es justamente el debate. Para algunos la combinación ideal sería un 20% de empresario y un 80% de activista cultural; para otros la proporción debería invertirse.

Considerando la propia dinámica del mercado, se me ocurre pensar que sin un contrapeso ajeno a sus leyes de hierro la proporción del elemento cultural tendería ineluctablemente a descender. Quiero decir con ello que si no existiesen ese género de editoriales (privadas o públicas) que se marcan como objetivo preferente el prestigio cultural, por encima incluso de las prioridades económicas, aquellas otras, netamente comerciales irían perdiendo paulatinamente su condición de agentes culturales y disminuyendo su inversión en valores intangibles (calidad literaria e innovación estética) hasta reducir a cero ese factor productivo.

Es innegable que si no subsistieran todavía "editoriales de referencia, que a contrapelo del mercado apuestan por nuevos valores literarios, cuidan portadas, diseños tipográficos y demás factores culturales, el gusto literario y artístico, a despecho de la crítica y de los profesores, descendería vertiginosamente. No es catastrofismo. No es ni más ni menos que lo que ha ocurrido con la televisión y demás industrias del ocio. Hemos visto cómo el progresivo acercamiento de las televisiones públicas a los objetivos mercantiles de las privadas, junto a la difícil subsistencia de pequeñas empresas culturales en el sector, ha provocado una drástica dualización del mismo. Una dualización que refleja los efectos perniciosos de neodarwinismo económico y del liberalismo rampante cuando se ejerce sobre un ámbito cultural: calidad y nivel intelectual para una minoría de telespectadores que pueden pagarse las cadenas de abonados y embrutecimiento gratis para el público en general.

En el terreno del libro, el contrapeso benéfico que hasta ahora viene frenando la degradación cultural lo están ejerciendo los críticos, los profesores de literatura y demás educadores –eso por supuesto-, pero también contribuyen a ello estas editoriales de referencia, verdaderos agentes culturales sin los cuales quizá no habría nueva literatura que enseñar.

Algunas de estas editoriales culturalmente prestigiosas sobreviven gracias a un empresario mecenas que se da el gusto de gastar en el libro los beneficios que obtiene

en otro sector más productivo, pero la mayoría tiene necesidad de verse apoyadas por el sector público. Las fórmulas pueden ser diversas: ayudas a la edición, coediciones o cesión por las instituciones de espacios expositores, tal como ha hecho la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres en el Liber'96. Al ejercer dicha ayuda institucional no sólo estará sosteniendo a un sector productivo en apuros sino que se estará practicando también esa actividad de promoción y fomento cultural que ningún gobernante progresista debe olvidar.

Pero la producción editorial además de empresa económica y empresa cultural es también – no lo olvidemos – una empresa ideológica y política. Bastaba pasearse por los salones del Liber'96 para darse cuenta: en lugares privilegiados se podían divisar los tenderetes de editoriales confesionales (islamistas, judías y sobre todo católicas) cargados de libros que acreditaban su carácter propagandístico y nada o poco mercantil. Es este un segundo núcleo de reflexión sobre el que me gustaría extenderme.

Cuando los debeladores de la edición institucional rechazan la publicación de libros con dinero público ¿lo hacen tan sólo guiados por el criterio de ahorro, lo hacen porque se niegan a que exista la empresa pública, o intervienen también otros motivos?.

Parece indudable que los *Servicios de Publicaciones* constituyen un poderoso aparato de difusión cultural, de transmisión de valores y configuración de imaginarios simbólicos. Son por ello una herramienta esencial en las tareas de constitución de una identidad colectiva. Por este motivo, cuando se configuró el *Estado de las Autonomías* una de las prioridades que se marcaron todas las Comunidades que fueron alcanzando autogobierno, fue, precisamente, la organizar sus propios *Servicios de Publicaciones* o *Editoras Regionales*. Las Autonomías y en su seno las Diputaciones, y los Municipios, se lanzaron a una reflexión escrita sobre su naturaleza e historia, a un proceso de autodefinition y autoconocimiento, que no ha hecho sino empezar. Eso fue lo que generó el espectacular crecimiento de la edición institucional y, no la llegada al poder de los socialistas, como dicen algunos ahora (recordemos que, por el contrario, fue el ministro de Cultura **Javier Solana** quien liquidó la mayor y más antigua editorial pública, la *Editora Nacional*)

Esta hipertrofia de las editoriales públicas va unida a la reconstrucción de una historia regional y a la búsqueda de referentes culturales autóctonos, capaces de alentar el sentimiento de identidad colectiva en el seno de las nuevas Comunidades. Por ello, cuando se discute si debe seguir existiendo una edición regional lo que se cuestiona, en realidad, es si Castilla, Extremadura o Canarias, por ejemplo, tienen el mismo derecho a construir su identidad colectiva y a promocionar su patrimonio histórico gastronomía, parajes naturales, pintores, escritores, etc. Un derecho que no se cuestiona, en cambio, para las “*Comunidades históricas*” de Cataluña, País Vasco o Galicia, las cuales cuentan con un tejido empresarial de editoras privadas, y además con poderosos aparatos institucionales de publicaciones. Algo que por cierto saltaba a la vista en los salones del *Liber'96*.